

Dirección General de Asuntos Jurídicos
Clave: 22_RCP_LEY_MGTO_2021
Expediente: ASEG/DGAJ/RR/01/2023
Oficio núm. ASEG/DGAJ/162/2023
Asunto: Notificación de Acuerdo de admisión de Recurso de Reconsideración.
Guanajuato, Gto., a 20 de enero de 2023

Lic. Stefany Marlene Martínez Armendáriz
Síndica del Ayuntamiento de Guanajuato, Gto.
Calle Cantarranas No. 5, Int. 1, Zona Centro
Guanajuato, Guanajuato.
Presente.

En cumplimiento al Acuerdo de admisión de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, emitido por el suscrito Director General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, le notifico, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 y 55, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, así como artículo 34 del Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, que se admitió a trámite el Recurso de Reconsideración en contra del Informe de Resultados derivado de la Revisión de Cuenta Pública por el periodo comprendido de enero a diciembre de 2021, practicada al municipio de Guanajuato, Gto., emitido por el Lic. y M.F. Javier Pérez Salazar y el C.P. Tomás Martín Hernández Gaytán, Auditor Superior, y Auditor Especial de Cumplimiento Financiero, respectivamente, de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, por usted promovido el 18 de enero de 2023, el cual se radicó con el número de expediente ASEG/DGAJ/RR/01/2023.

Sírvase encontrar anexo, original del acuerdo de admisión referido.

Atentamente,

Lic. Omar Patiño Rodríguez
Director General de Asuntos Jurídicos



Con copia para:

- ☐ Lic. y M.F. Javier Pérez Salazar, Auditor Superior del Estado de Guanajuato.
- ☐ C.P. Hugo Arturo Pérez Guzmán, Secretario Técnico de la Auditoría Superior.
- ☐ C.P. y M.A. Víctor Manuel Padilla Luna, Auditor Especial de Cumplimiento Financiero. Para conocimiento y efectos.
- ☐ Expediente.

GRL/CJGP/RVR

En la Ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, a los diecinueve días de enero de dos mil veintitrés.

Considerando el escrito de fecha 18 de enero de 2023, recibido el mismo día, en la Unidad de Archivo, Correspondencia y Notificación de esta Auditoría Superior, a través del cual la **Lic. Stefany Marlene Martínez Armendáriz**, en su carácter de Síndica del Ayuntamiento de Guanajuato, Guanajuato, interpone Recurso de Reconsideración, en contra del informe de resultados derivado de la Revisión de Cuenta Pública, por el periodo comprendido de enero a diciembre de 2021, practicada al municipio de Guanajuato, Guanajuato, del **10 de enero de 2023**, emitido por el Lic. y M.F. Javier Pérez Salazar y el C.P. Tomás Martín Hernández Gaytán, Auditor Superior, y Auditor Especial de Cumplimiento Financiero, de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, respectivamente; mismo que fue notificado el **11 de enero de 2023**, resulta necesario proveer conforme a derecho, en los términos siguientes. -----

Primero. Oportunidad. El informe impugnado se notificó al sujeto fiscalizado, el **11 de enero de 2023**, por tanto, el término para interponer el medio de defensa expiraba el día 18 de enero de 2022, esto es, el día en que fue presentado, al ser inhábiles los días sábado 14 y domingo 15 de enero de 2023. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo de 18 de noviembre de 2022, referente a los días hábiles de trabajo en la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato para el año 2023, suscrito por el Auditor Superior y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el día 29 de noviembre de 2022. -----

Mediante acuerdo del 16 de noviembre de 2022, suscrito por el Auditor Superior del Estado de Guanajuato, y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el día 24 de noviembre de 2022, se acordó suspender el plazo de duración determinado por los artículos 35 primer párrafo, en relación con el 37, fracción V, primer párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, de diversos procesos de revisión de cuenta pública, entre ellos, la Revisión de Cuenta Pública por el periodo comprendido de enero a diciembre de 2021 practicada al municipio de Guanajuato, Guanajuato, esto con el fin de suspender el plazo del proceso de revisión incluyendo la entrega del informe de resultados al Congreso del Estado de Guanajuato, estableciéndose dentro del acuerdo mencionado un plazo de suspensión de 58 días naturales.-----

Lo anterior, no impide a esta Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a que derivado de las diligencias y actuaciones realizadas durante dicho plazo de suspensión culmine el proceso de fiscalización con la consecuente entrega del informe de resultados al Congreso del Estado sin agotar en su totalidad los días de suspensión establecidos en el acuerdo de previa cita.

Segundo. Formación de expediente. Con el oficio de cuenta, y toda vez que el medio de impugnación promovido colma los requisitos de procedencia enunciados en el artículo 51, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, admítase a trámite el recurso de reconsideración interpuesto y fórmese el expediente respectivo registrándose con la clave **ASEG/DGAJ/RR/01/2023**, por corresponderle en razón de turno.-----

Tercero. Competencia. El Auditor Superior del Estado de Guanajuato, es competente para resolver el Recurso de Reconsideración interpuesto, acorde a lo dispuesto en los artículos 55 y 87, fracción X, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato y 9, fracción XX, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. ----

Cuarto. Medios de prueba. La recurrente ofreció y exhibió, a efecto de demostrar sus argumentos impugnativos y con la finalidad de que esta resolutoria falle acorde a su pretensión, los siguientes medios de convicción: -----

- 1) Documental pública, para acreditar la personalidad de la recurrente, consistente en copia certificada de Sesión Ordinaria del Ayuntamiento número 1, celebrada el 10 de octubre de 2021, específicamente con los puntos 4 y 9 del orden del día.
- 2) Presuncional en su doble aspecto legal y humana.

- 3) Copia certificada de oficio número DFE/760/2022, de fecha 22 de diciembre de 2022, suscrito por el Presidente Municipal y la Secretaria del Ayuntamiento, mediante el cual solicitan al Director General de Asuntos Jurídicos de Gobierno del Estado, la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, del Acuerdo contenido en Acta de Sesión Ordinaria número 43 del H. Ayuntamiento del 17 de diciembre de 2020, donde se aprobó la enajenación de los 138 vehículos en desuso no aptos para circular.
- 4) Oficio DSA/007/2023, de fecha 17 de enero de 2023, suscrito por el Director de Seguimiento de Auditorías, mediante el cual remite al Director General de Servicios Jurídicos, copia de la respuesta del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato (SIMAPAG) a las observaciones no solventadas, adjuntando al mismo:
- 5) Copia simple de oficio 0039-DG-DAF/2023, de fecha 16 de enero de 2023, suscrito por el Director General del SIMAPAG, mediante el cual informa al Director de Seguimiento de Auditorías del municipio de Guanajuato la respuesta al informe de resultados, respecto de la observación número 005 y recomendaciones número 002 y 003 (conteniendo solo las páginas: 1 de 4, 3 de 4 y 4 de 4).
- 6) Copia simple de memorando No. 253/DG-DAF/2022, de fecha 02 de diciembre de 2022, suscrito por el Director General del SIMAPAG, mediante el cual remite al Presidente del Consejo Directivo, para análisis y revisión de la Comisión Jurídica, y en su caso, autorización por parte del Consejo Directivo, la propuesta de actualización de los Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal para el Ejercicio 2023, Sección Segunda, apartado XVI de "Complementarios, donativos y ayudas".
- 7) Copia simple de memorando No. 1077-DAF/2022, de fecha 23 de diciembre de 2022, suscrito por la Directora de Administración y Finanzas del SIMAPAG, mediante el cual solicita a la Coordinadora Financiera, la creación de cuentas contables para que se reflejen los ingresos por rezago.
- 8) Copia simple de memorando No. 005-CF/2022, de fecha 30 de diciembre de 2022, suscrito por la Coordinadora Financiera del SIMAPAG, mediante el cual informa a la Directora de Administración y Finanzas, la creación de las cuentas de ingresos por rezagos.
- 9) Impresión de "Anexo de Mayor del 01/01/2022 al 31/12/2022, del SIMAPAG.

Los medios de prueba de referencia se tienen por admitidos por tratarse de pruebas novedosas y supervenientes, de conformidad con el artículo 51 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato y se ponderarán con sujeción a las reglas previstas en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 64, segundo párrafo, del Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato. -----

En virtud de lo anterior y previo a la valoración correspondiente, este ente auditor con apoyo de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, deberá realizar las acciones siguientes: analizar y valorar los medios de prueba aportados, realizando las diligencias necesarias para tal efecto, con el fin de comprobar si la información proporcionada resulta suficiente para modificar el sentido de la valoración de las observaciones y recomendaciones con las que las mismas se relacionan, pues con el objeto de contar con la información para mejor proveer, se podrán realizar aquellas diligencias que se estimen necesarias para tal efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato. -----

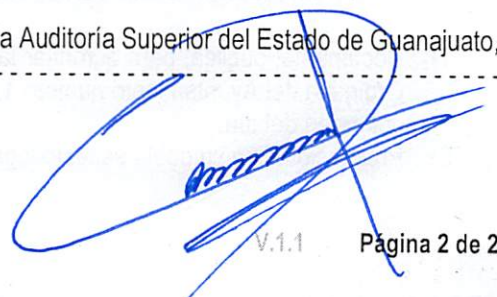
Quinto. Notificación a la recurrente. Notifíquese a la recurrente en el domicilio indicado para esos efectos. Se tiene a la recurrente señalando como domicilio para recibir notificaciones, el ubicado en **Calle Cantarranas No. 5, Int. 1, Zona Centro, Guanajuato, Gto.**, y autorizando para recibirlas a los Licenciados José Luis Vega Godínez, Armando Trueba Uzeta, Iván Mendoza Guerrero, Luis Eduardo Flores Jaime y Óscar Daniel Villalobos Flores, en términos de lo dispuesto por el artículo 51, fracción III, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato. -----

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracciones V y XIV, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. -----

Notifíquese y cúmplase. -----

Así lo proveyó y firma el ciudadano Director General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, **Licenciado Omar Patiño Rodríguez.** -----

☐ Expediente.
GRL/RVR



V.1.1



Dirección General de Asuntos Jurídicos
Clave: 22_RCP_LEY_MGTO_2021
Expediente: ASEG/DGAJ/RR/01/2023
Oficio núm. ASEG/DGAJ/167/2023
Asunto: Notificación de Resolución de Recurso
de Reconsideración.
Guanajuato, Gto., a 27 de enero de 2023

Lic. Stefany Marlene Martínez Armendáriz
Síndica del Ayuntamiento de Guanajuato, Gto.
Calle Cantarranas No. 5, Int. 1, Zona Centro
Guanajuato, Guanajuato.
Presente.



En cumplimiento a la resolución de **veintiséis de enero de 2023**, emitida por el Auditor Superior del Estado de Guanajuato, le notifico, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 y 55, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, así como artículo 34 fracción VII del Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, **que se resolvió** el Recurso de Reconsideración en contra del Informe de Resultados derivado de la Revisión de Cuenta Pública por el periodo comprendido de enero a diciembre de 2021, practicada al municipio de Guanajuato, Gto., emitido por el Lic. y M.F. Javier Pérez Salazar y el C.P. Tomás Martín Hernández Gaytán, Auditor Superior, y Auditor Especial de Cumplimiento Financiero, respectivamente, de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, por usted promovido el **18 de enero de 2023**, el cual se radicó con el número de expediente **ASEG/DGAJ/RR/01/2023**.

Sírvase encontrar anexo, original de la **resolución** referida.

El presente documento, se firma electrónicamente con fundamento en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, el Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato y la Ley Sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.

Atentamente,

Lic. Omar Patiño Rodríguez
Director General de Asuntos Jurídicos

Con copia para:

- ☐ Lic. y M.F. Javier Pérez Salazar, Auditor Superior del Estado de Guanajuato.
- ☐ C.P. Hugo Arturo Pérez Guzmán, Secretario Técnico de la Auditoría Superior.
- ☐ C.P. y M.A. Víctor Manuel Padilla Luna, Auditor Especial de Cumplimiento Financiero. Para conocimiento y efectos.
- ☐ Expediente.

GRL/CJGP/RVR

Hoja de Firmantes

Documento

Nombre: Notificación resolución de Recurso GTO. RCP 2021.pdf
Digestión del Archivo: QASh8k7Zr0wKHhwLxEV5vYLqoH+r3IPDdy32PxZ/Qm4=
Algoritmo de Digestión: SHA256

FIRMANTE

Nombre: OMAR PATIÑO RODRIGUEZ - DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Validez: Vigente

FIRMA

No Serie: 50.4c.45.47.30.31.00.00.00.04.91 Revocación: No Revocado
Fecha (UTC / CD MX): 27/01/2023 17:58:27 - 27/01/2023 11:58:27 Status: Valida
Algoritmo: RSA - SHA2

Cadena de firma:
a0 3f fc 08 41 25 c0 9f a1 2f 3a d2 33 97 00 08 8b 4b c5 97 57 e6 35 de a8 71 53 15 20 f7 61 03 b1 b7 f9 95 94 5e bb 09 c2 f6 d0
6c 55 cc 29 f7 59 6d 2a bf 33 74 d5 6b 4d cb df 37 3c 64 87 0f 98 a9 71 4c 36 53 68 24 8e 7f 59 a6 37 63 a7 f3 65 73 b9 a0 04 c8
a3 5d 42 6d 0f ea bc 00 4d c9 f2 8f 54 84 b0 02 47 75 f8 bd 54 27 5d 0e da b6 cf f2 99 5e 46 cf 88 d3 1c 98 d1 dc 2c 49 8a b5 5c 55
1a 4e 07 34 74 ee b3 53 8c 33 ea 71 b0 d4 60 d0 6b ac 00 d3 c5 88 10 ad ce 11 66 46 d7 43 d0 82 03 05 e2 f9 0b 25 ee d3 71 ee
cc 9c 86 ae aa e2 31 f0 91 d1 1f d8 16 b8 35 25 e8 51 a6 cf 2c 62 01 47 b8 bb a9 d6 76 ed d8 59 a0 c4 3a 20 9c 08 b7 b6 20 7e e9
c6 0a 06 7c b6 0e cd 1c 6a 97 aa 9b 6c cf 87 66 b7 90 30 ec 00 b7 3b 5d 89 61 3d 58 ed 94 5a ea b8 54 a0 47 35 ea 1e e5 46

OCSP

Fecha (UTC / CD MX): 27/01/2023 18:00:07 - 27/01/2023 12:00:07
Nombre del Respondedor: Servicio OCSP de la AC del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato
Emisor del Respondedor: AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Número de Serie: 50.4c.45.47.30.31.30.35

TSP

Fecha (UTC / CD MX): 27/01/2023 18:00:08 - 27/01/2023 12:00:08
Nombre del emisor de la respuesta TSP: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1
Emisor del certificado TSP: Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economia
Identificador de respuesta TSP: 638104176080512858
Datos: /4bSSfphGyL7SagBNIsRQrFQTKI=

Firma Electrónica Certificada

En la Ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, a los veintiséis días de enero de dos mil veintitrés. - -

Visto el estado que guarda el expediente radicado con el número ASEG/DGAJ/RR/01/2023, derivado de la promoción del recurso de reconsideración interpuesto por la Lic. Stefany Marlene Martínez Armendáriz, en su carácter de Síndica del Ayuntamiento de Guanajuato, Guanajuato, en contra del Informe de Resultados derivado de la Revisión de Cuenta Pública, por el periodo comprendido de enero a diciembre de 2021, practicada al municipio de Guanajuato, Guanajuato, del 10 de enero de 2023, emitido por el Lic. y M.F. Javier Pérez Salazar y el C.P. Tomás Martín Hernández Gaytán, Auditor Superior, y Auditor Especial de Cumplimiento Financiero, de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, respectivamente; mismo que fue notificado el 11 de enero de 2023, ha llegado el momento oportuno de resolver conforme a derecho y -----

RESULTANDO:

Primero: El 10 de enero de 2023 el Auditor Superior y el Auditor Especial de Cumplimiento Financiero, de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, emitieron el Informe de Resultados derivado de la Revisión de Cuenta Pública, por el periodo comprendido de enero a diciembre de 2021, practicada al municipio de Guanajuato, Guanajuato, mismo que le fue notificado al sujeto fiscalizado el 11 de enero de 2023. -----

Segundo: Mediante escrito de fecha 18 de enero de 2023, suscrito por la Lic. Stefany Marlene Martínez Armendáriz, en su carácter de Síndica del Ayuntamiento de Guanajuato, Guanajuato, recibido el mismo día, en la Unidad de Archivo, Correspondencia y Notificación de esta Auditoría Superior, se interpuso Recurso de Reconsideración en contra del Informe de Resultados derivado de la Revisión de Cuenta Pública, por el periodo comprendido de enero a diciembre de 2021, practicada al municipio de Guanajuato, Guanajuato, señalado en el resultando anterior. -----

Tercero: Mediante Acuerdo de 19 de enero de 2023, suscrito por el Director General de Asuntos Jurídicos, se admitió el recurso de reconsideración referido en los resultandos anteriores, el cual fue notificado a la recurrente mediante oficio ASEG/DGAJ/162/2023 de fecha 20 de enero de 2023. -----

Así las cosas, es procedente resolver el medio de impugnación interpuesto.

CONSIDERANDO:

Primero. Competencia. El suscrito Auditor Superior del Estado de Guanajuato, es competente para conocer y resolver el Recurso de Reconsideración interpuesto, acorde a lo dispuesto en los artículos 55 y 87, fracción X, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato y 9, fracción XX, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. -----

Segundo. Procedencia formal. Analizado el escrito impugnativo, se advierte que se colman los requisitos de procedencia exigidos por el artículo 51 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato. -----

Tercero. Oportunidad. Es de señalarse que el recurso de reconsideración de marras fue presentado oportunamente, como lo indica el Acuerdo de admisión de 19 de enero de 2023. -----

Mediante acuerdo del 16 de noviembre de 2022, suscrito por el Auditor Superior del Estado de Guanajuato, y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el día 24 de noviembre de 2022, se acordó suspender el plazo de duración determinado por los artículos 35 primer párrafo, en relación con el 37, fracción V, primer párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, de diversos procesos de revisión de cuenta pública, entre ellos, la Revisión de Cuenta Pública por el periodo comprendido de enero a diciembre de 2021 practicada al municipio de Guanajuato, Guanajuato, esto con el fin de suspender el plazo del proceso de revisión incluyendo la entrega del informe de resultados al Congreso del Estado de Guanajuato, estableciéndose dentro del acuerdo mencionado un plazo de suspensión de 58 días naturales.-----

Lo anterior, no impide a esta Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a que derivado de las diligencias y actuaciones realizadas durante dicho plazo de suspensión culmine el proceso de fiscalización con la consecuente entrega del informe de resultados al Congreso del Estado sin agotar en su totalidad los días de suspensión establecidos en el acuerdo de previa cita.

Cuarto. Legitimación. La impugnante cuenta con legitimación para interponer el citado recurso de reconsideración, toda vez que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, en contra del informe de resultados procederá el medio de impugnación de mérito. -----

Quinto. Personalidad jurídica. Esta resolutora reconoce la personalidad jurídica de la recurrente, pues la misma ha quedado acreditada, con la copia certificada de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento número 1, celebrada el 10 de octubre de 2021, específicamente con los puntos 4 y 9 del orden del día, aportada por la recurrente. -----

Sexto. Medios de convicción. La recurrente ofreció y exhibió, a efecto de demostrar sus argumentos impugnativos y con la finalidad de que esta resolutora falle acorde a su pretensión, los siguientes medios de convicción: -----

- 1) Documental pública, para acreditar la personalidad de la recurrente, consistente en copia certificada de Sesión Ordinaria del Ayuntamiento número 1, celebrada el 10 de octubre de 2021, específicamente con los puntos 4 y 9 del orden del día.
- 2) Copia certificada de oficio número DFE/760/2022, de fecha 22 de diciembre de 2022, suscrito por el Presidente Municipal y la Secretaria del Ayuntamiento, mediante el cual solicitan al Director General de Asuntos Jurídicos de Gobierno del Estado, la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, del Acuerdo contenido en Acta de Sesión Ordinaria número 43 del H. Ayuntamiento del 17 de diciembre de 2020, donde se aprobó la enajenación de los 138 vehículos en desuso no aptos para circular.
- 3) Oficio DSA/007/2023, de fecha 17 de enero de 2023, suscrito por el Director de Seguimiento de Auditorías, mediante el cual remite al Director General de Servicios Jurídicos, copia de la respuesta del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato (SIMAPAG) a las observaciones no solventadas, adjuntando al mismo:
- 4) Copia simple de oficio 0039-DG-DAF/2023, de fecha 16 de enero de 2023, suscrito por el Director General del SIMAPAG, mediante el cual informa al Director de Seguimiento de Auditorías del municipio de Guanajuato la respuesta al informe de resultados, respecto de la observación número 005 y recomendaciones número 002 y 003 (conteniendo solo las páginas: 1 de 4, 3 de 4 y 4 de 4).
- 5) Copia simple de memorando No. 253/DG-DAF/2022, de fecha 02 de diciembre de 2022, suscrito por el Director General del SIMAPAG, mediante el cual remite al Presidente del Consejo Directivo, para análisis y revisión de la Comisión Jurídica, y en su caso, autorización por parte del Consejo Directivo, la propuesta de actualización de los Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal para el Ejercicio 2023, Sección Segunda, apartado XVI de "Complementarios, donativos y ayudas".
- 6) Copia simple de memorando No. 1077-DAF/2022, de fecha 23 de diciembre de 2022, suscrito por la Directora de Administración y Finanzas del SIMAPAG, mediante el cual solicita a la Coordinadora Financiera, la creación de cuentas contables para que se reflejen los ingresos por rezago.
- 7) Copia simple de memorando No. 005-CF/2022, de fecha 30 de diciembre de 2022, suscrito por la Coordinadora Financiera del SIMAPAG, mediante el cual informa a la Directora de Administración y Finanzas, la creación de las cuentas de ingresos por rezagos.

8) Impresión de "Anexo de Mayor del 01/01/2022 al 31/12/2022, del SIMAPAG.

Los medios de prueba referidos se tienen por admitidos al tratarse de pruebas novedosas y/o supervenientes, de conformidad con el artículo 51 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato y se ponderarán con sujeción a las reglas previstas en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 64, segundo párrafo, del Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato. -----

En virtud de lo anterior y previo a la valoración correspondiente, este ente auditor con apoyo de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, debe analizar y valorar las pruebas que fueron admitidas, realizando las diligencias necesarias para tal efecto, con el fin de comprobar si la información proporcionada resulta suficiente para modificar el sentido de la valoración, pues con el objeto de contar con la información para mejor proveer, se podrán realizar aquellas diligencias que se estimen necesarias para tal efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato. -----

Séptimo. Agravios. En el presente considerando se analizarán los agravios presuntamente causados con la emisión del informe de resultados recurrido, en el orden en que fueron expuestos. -----

Observación Núm. 001 Especificaciones técnicas de Equipo de Cómputo.

La observación recurrida señala en esencia lo siguiente:

«Con base en los elementos aportados y las diligencias efectuadas se observa que, las órdenes de compra correspondientes a la adquisición de un total de 15 equipos de cómputo señalan el modelo específico «Macbook», con base en recomendaciones Técnicas emitidas por la Dirección de Tecnologías de la Información del Municipio, en las cuales se detallan especificaciones y características técnicas que solamente cumple el modelo «Macbook» de la empresa «Apple, Inc.», sin que se hayan acreditado las razones técnicas que justifiquen el requerir y adquirir bienes cuyas características solamente puede cumplir una marca en específico.

[...]»

La respuesta al Pliego de Observaciones y Recomendaciones fue insuficiente para solventar la observación, por lo que fue valorada como **No Solventada**, sin acciones pendientes de realizar por el sujeto fiscalizado. -----

Inconforme con tal determinación, la recurrente expone lo siguiente: -----

«Primero [...]

De la revisión de la información entregada al órgano auditor por los distintos servidores públicos consultados con relación al tema, resulta cierto que no se esgrimen argumentos para justificar la conveniencia técnica para el uso de equipos MacBook, en el ejercicio de las funciones a cargo de los síndicos, regidores y director de servicios jurídicos del municipio de Guanajuato.

En reconsideración de la conclusión que ahora se recurre, se solicita al órgano de fiscalización tomar en cuenta hechos notorios existentes al momento de la auditoría, que justifican razonablemente la necesidad del uso de este tipo de equipos, por quienes los tienen bajo su resguardo. A saber:

1. La movilidad de los equipos es cotidiana e intensa, lo que supone para los bienes un riesgo de robo o extravío mayor.

Al respecto, los equipos de la marca empleada, a diferencia de cualquier otro, debido a su sistema operativo y aplicativos, facilitan enormemente su localización, pues su ecosistema de conectividad permite, aún apagados, el envío de señales de rastreo en tiempo real, accesibles al usuario y a la autoridad ministerial, incrementando notablemente las posibilidades de su recuperación.

En estas condiciones, debido a la multiplicidad de reuniones con las distintas áreas de la administración, así como por el intenso trabajo en campo que los usuarios del equipo realizan, el municipio garantiza de mejor manera la propiedad y posesión de sus bienes.

2. El almacenamiento de información se encuentra permanentemente respaldado en servidores de la nube, denominada iCloud, lo que garantiza la existencia (no pérdida) e integridad de toda la información municipal a cargo de los servidores públicos que emplean el equipo, aún en los casos de su robo o extravío. Ello es así debido a que los archivos informáticos, aunque se encuentran físicamente en el equipo, también obran duplicados en un servidor remoto de la marca, accesible desde cualquier otro equipo a través de un sitio web, al cual se accede exclusivamente a través de las credenciales del usuario, constituidas por su correo electrónico institucional y una contraseña, inaccesibles o indisponibles para terceros.

3. El equipo, en caso de robo o extravío, puede ser remotamente inutilizado y la información eliminada completamente a través de la programación de una instrucción; esto es, el sistema operativo y los aplicativos de la marca, ante la falta de recuperación del equipo, permiten al servidor público generar la instrucción para que ante el encendido y conexión del equipo a internet, el contenido de éste sea completamente eliminado, garantizando que toda la información sea inaccesible a terceros, evitando también su indebida utilización.

Al mismo tiempo, el equipo quedará inhabilitado para su uso por un tercero, quedando completamente inutilizado e inservible para un poseedor ilegítimo. En el caso de su recuperación, el servidor público contará con las capacidades (credenciales) para su rehabilitación y reutilización.

Así pues, ante estas tres características no ofrecidas por otro tipo de equipo de cómputo, y en atención a la naturaleza de la relevancia y sensibilidad de la información a cargo de las funciones de gobierno y directivas de los síndicos, regidores y directores del municipio de Guanajuato, es que respetuosamente se solicita al órgano auditor considere justificada la observación de referencia, por acreditación de la idoneidad del equipo de cómputo con las funciones en que se desempeñan.

También conviene indicar que las funcionalidades expresadas han sido y son notoriamente públicas, consultables y acreditables desde el sitio oficial de la marca <https://www.apple.com/mx/>

Así pues, de conformidad a lo dispuesto por el propio artículo 7 del Reglamento de Contrataciones Públicas del Municipio de Guanajuato, citado por el órgano de control para fundamentar su valoración, se desprende que para la aplicación de ese reglamento se tiene sujeta al principio de legalidad, principio que tiene su génesis en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual se traduce en el caso particular de una autoridad, como lo es el Ayuntamiento de Guanajuato, en que éste únicamente puede hacer lo que la ley le permite.

Toda vez que, de las requisiciones señaladas, así como de los informes presentados al órgano de control, se desprende que no se solicitó una marca específica, y en el supuesto que así hubiera

sido sin ánimo de conceder, no existe prohibición en la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, al contrario, establece que ésta se puede realizar sujetándose al procedimiento de contratación respectivo de conformidad con el monto correspondiente.

Es preciso señalar que de la interpretación del primer párrafo del artículo 16 constitucional, el principio de legalidad tiene una doble funcionalidad, y una de éstas se caracteriza porque genera la presunción de que toda actuación de la autoridad deriva del ejercicio de una facultad que la ley le confiere, en tanto no se demuestre lo contrario, presunción de legalidad ampliamente reconocida tanto en la doctrina como en la legislación nacional, como se desprende de la tesis IV.20.A.51 K (10a.), con rubro "PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERÍSTICAS DE SU DOBLE FUNCIONALIDAD TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELACIÓN CON EL DIVERSO DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL.", la cual se cita a continuación:

[...]

Luego entonces, toda vez que el sujeto fiscalizado no ha violado el principio de legalidad, pues la contratación de marcas específicas se encuentra regulada en la propia Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, es posible reconsiderar la observación, para considerarla solventada por estar acreditada la idoneidad del equipo de cómputo adquirido, con las funciones que se desempeñan para su uso.»

Analizado lo manifestado por la recurrente, y las demás constancias que integran al expediente administrativo en que se actúa, se considera lo siguiente: -----

El agravio formulado resulta **inoperante**, para tener por solventada la observación de mérito, atento a las siguientes consideraciones:

Como se puede apreciar, señala claramente la recurrente que, de la revisión realizada a la información que en su momento fue entregada a este órgano fiscalizador, «[...] resulta cierto que no se esgrimen argumentos para justificar la conveniencia técnica para el uso de equipos MacBook [...]», manifestación con la cual, confirma la observación realizada por este ente fiscalizador. No obstante lo anterior, la recurrente solicita considerar justificada la observación, considerando acreditar la «[...] idoneidad del equipo de cómputo con las funciones que se desempeñan [...]», en atención a las características que contienen los equipos de cómputo adquiridos, las cuales detalla, mismas que no son ofrecidas por otro tipo de equipos, «[...] y en atención a la naturaleza de la relevancia y sensibilidad de la información a cargo de las funciones de gobierno y directivas de los síndicos, regidores y directores del municipio de Guanajuato [...]».

Luego, de las transcripciones expuestas se desprende que, tal y como ha quedado acreditado en la observación en estudio, el sujeto fiscalizado omitió la observancia de lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, en relación con el artículo 2 del Reglamento de Contrataciones Públicas del Municipio de Guanajuato, toda vez que adquirieron los equipos de cómputo de referencia atendiendo a especificaciones técnicas que única y exclusivamente tiene una marca, "Apple", sin adjuntar razones técnicas debidamente justificadas, proseguidas del procedimiento del comité correspondiente, para que procediera su autorización.

Ahora bien, con la información presentada por la recurrente se advierte que se hacen valer argumentos que tienden a aportar razones técnicas que justifican su actuación, mismas que son insuficientes para acreditar el cumplimiento de la norma inobservada, pues las mismas no se encuentran contenidas en dictamen técnico firmado autógrafamente por el titular del Centro Gestor y el personal técnico que lo elabore, para su análisis por la DAYSG y/o el Comité, según sea el caso, para su procedencia a trámite de autorización.

Atendiendo a las consideraciones expuestas, lo procedente en derecho es confirmar el sentido de la valoración de la observación recurrida, como **No Solventada**, sin acciones pendientes de realizar por el sujeto fiscalizado. -----

Observación Núm. 003 Publicación en el Periódico Oficial.

La observación recurrida señala en esencia lo siguiente:

«Con base en los elementos aportados y las diligencias efectuadas, se observa la falta de acreditamiento de la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, de la enajenación de 138 vehículos en desuso, no aptos para circular, dicha enajenación fue aprobada mediante Acta de Sesión Ordinaria número 43 del H. Ayuntamiento del 17 de diciembre de 2020.

[...]»

La respuesta al Pliego de Observaciones y Recomendaciones fue insuficiente para solventar la observación, por lo que fue valorada como **No Solventada**, con acciones correctivas pendientes de realizar por el sujeto fiscalizado. -----

Inconforme con tal determinación, la recurrente expone lo siguiente: -----

«Segundo [...]

El órgano de control valora esta observación como no solventada, con acciones correctivas pendientes de realizar por el sujeto fiscalizado, lo que se entiende en que el Acuerdo de Ayuntamiento, aprobado mediante Sesión Ordinaria número 43 en fecha 17 de diciembre de 2020, no se encuentra acreditada su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato.

Como se desprende del oficio número DFE/760/2022, de fecha 22 de diciembre de 2022, remitido al Maestro Alejandro Sierra Lugo, Director General de Asuntos Jurídicos de Gobierno de Estado, se ha solicitado la publicación del Acuerdo señalado en el párrafo anterior, mismo que se anexa al presente, por lo que esta Auditoría Superior, a partir de tal acto, puede reconsiderar como solventada la observación, toda vez que la publicación de referencia se encuentra solicitada, quedando el municipio en espera de la ejecución de su petición.».

Analizado lo manifestado por la recurrente las pruebas exhibidas y las demás constancias que integran al expediente administrativo en que se actúa, se considera lo siguiente: -----

Cabe precisar que aún y cuando de la literalidad de lo expuesto por la recurrente, se desprende que no es propiamente un agravio, resulta procedente entrar al estudio de lo manifestado, pues es suficiente para ello la expresión de la causa de pedir y los motivos que la originan.

Resulta aplicable por mayoría de razón el criterio 2014329 sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Sexto Circuito, visible en la página 2195 del Libro 42, Tomo III, de mayo de 2017, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que a continuación se transcribe:

“VIOLACIONES PROCESALES. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE PRECISAR EN LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO LA FORMA EN QUE TRASCENDIERON EN SU PERJUICIO AL RESULTADO DEL FALLO, DEBE ANALIZARSE ATENDIENDO A LA CAUSA DE PEDIR. El numeral 174 de la Ley de Amparo establece la obligación del quejoso de precisar la forma en que las violaciones procesales trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo, para que el Tribunal Colegiado de Circuito cumpla con su obligación de examinarlas. Por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 68/2000, dispuso que los argumentos del quejoso deben analizarse, aunque no tengan la forma

lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte de la demanda se exprese la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estime le causa el acto reclamado y los motivos que lo originaron. Ahora bien, la Segunda Sala del Máximo Tribunal, al resolver el amparo directo en revisión 932/2015, estableció que, a efecto de ser acorde con el derecho humano de acceso a la justicia, el cumplimiento de la carga procesal que establece el aludido artículo 174 debe interpretarse en un sentido razonable, esto es, que sea congruente con la finalidad que persigue, pero sin que constituya una carga desproporcionada que se torne en un obstáculo excesivo para impugnar violaciones procesales, lo que deriva en que éstas deben analizarse a la luz de la causa de pedir del quejoso, de la cual pueda advertirse de una manera clara la forma en que la violación procesal alegada trascendió al resultado del fallo en su perjuicio y no exigir el agotamiento de una determinada fórmula estricta. Por tanto, debe estimarse satisfecha la referida carga procesal, sin que sea necesario exigir el cumplimiento de fórmulas estrictas -silogismos o expresión de fórmulas sacramentales-, por lo que bastará con que el quejoso argumente, por ejemplo, que la autoridad responsable actúa de manera ilegal al limitar su derecho a desahogar pruebas para probar su dicho, o que se limitó su derecho de contestar la demanda y oponer las excepciones y defensas, para que el Tribunal Colegiado de Circuito deba estudiar tales razonamientos.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo directo 745/2016. 2 de febrero de 2017. Unanimidad de votos, con voto concurrente del Magistrado Miguel Mendoza Montes. Ponente: Miguel Ángel Ramos Pérez. Secretario: Marco Martínez Meneses.

Amparo directo 635/2016. 23 de febrero de 2017. Unanimidad de votos, con voto concurrente del Magistrado Miguel Mendoza Montes. Ponente: Miguel Mendoza Montes. Secretaria: Marisol Camacho Levín.

Nota: La tesis de jurisprudencia P.J. 68/2000, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.", citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 38."

(Énfasis añadido).

De lo anterior, tomando en cuenta que la recurrente presentó medios de convicción tendientes a solventar la observación en estudio, esta resolutoria se pronunciará respecto de la documental aportada vinculada con dicha observación, concretamente la copia certificada del oficio número DFE/760/2022, de fecha 22 de diciembre de 2022, suscrito por el Presidente Municipal y la Secretaria del Ayuntamiento, mediante el cual solicitan al Director General de Asuntos Jurídicos de Gobierno del Estado, la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, del Acuerdo contenido en Acta de Sesión Ordinaria número 43 del H. Ayuntamiento del 17 de diciembre de 2020, donde se aprobó la enajenación de los 138 vehículos en desuso no aptos para circular, misma que quedó detallada en el considerando sexto de la presente resolución.

En ese sentido, una vez analizada y valorada la referida documental, se advierte que se acreditan las acciones tendientes a la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, del acuerdo del Ayuntamiento donde se aprobó la enajenación de los 138 vehículos en desuso no aptos para circular; sin embargo, con independencia de que la recurrente demuestre que se ingresó la solicitud para efectuar la referida publicación, como se aprecia con el sello de recepción, impreso en la copia certificada aportada, dicha solicitud se realizó de manera regulatoria, es decir, con posterioridad a que se dio a conocer el hallazgo de la revisión, por lo que la información proporcionada resulta suficiente únicamente para modificar el complemento de la valoración de la observación en análisis, toda vez que con dichas acciones, confirma lo detectado por este

ente fiscalizador, esto es, que no se había publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el referido acuerdo

Por tanto, lo procedente en derecho es modificar el complemento de la valoración de mérito, para tenerla como **No Solventada, sin acciones pendientes de realizar por el sujeto fiscalizado.** -----

Observación Núm. 004. Finiquito.

La observación recurrida señala en esencia lo siguiente:

«Con base en los elementos aportados y las diligencias efectuadas, se observa una erogación adicional por \$16,570.38, en el pago del finiquito al ex trabajador con clave de empleado «991», quien desempeñó el puesto de «OPERADOR/A TECNICO/A», toda vez que, para efectuar el cálculo, el Municipio utilizó un salario diario integrado superior al autorizado para dicha plaza, de acuerdo con lo especificado en el Tabulador de Sueldos y Salarios “PRESUPUESTO 2021” autorizado por el H. Ayuntamiento.

[...]»

La respuesta al Pliego de Observaciones y Recomendaciones fue insuficiente para solventar la observación, por lo que fue valorada como **No Solventada**, con acciones de impacto económico pendientes de realizar por el sujeto fiscalizado. -----

Inconforme con tal determinación, la recurrente expone lo siguiente: -----

«Tercero [...]

Si bien de la información entregada al órgano auditor por los distintos servidores públicos consultados con relación al tema, se detectó que el cálculo obedeció a un error en la fórmula de cálculo establecida en un equipo de cómputo, es importante valorar que el monto erogado en beneficio del extrabajador se encuentra muy por debajo de las obligaciones económicas a las que el municipio se encontraba obligado, en tanto que a partir del proceso de negociación laboral, la diligencia del personal que lo realizó para cuidar de los recursos públicos, concretó un acuerdo de voluntades que significó un importante ahorro para el erario público.

Esto es así al tener en cuenta un análisis integral del pago efectuado, a la luz de toda la normatividad aplicable, como en el caso cobran particular relevancia las disposiciones de carácter laboral aplicables, en tanto que la relación entre el ex trabajador y el Municipio era de esta naturaleza, derivándose necesaria e ineludiblemente que el pago de un finiquito se desprende de los preceptos establecidos en esta materia.

Así pues, en este tenor, conviene citar lo establecido en los artículos 9 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, y, 33 de la Ley Federal del Trabajo, que establecen lo siguiente:

[...]

Como se desprende de la normatividad expuesta, la renuncia de un trabajador no exime a la parte patronal de cubrir la indemnización a que éste tiene derecho, y la propia Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios establece como concepto de esta prestación, el pago de 90 días.

En este sentido, el cálculo que se tomó como base para el pago de finiquito del trabajador, con independencia del error reconocido por la Dirección de Recursos Humanos, establece como concepto de indemnización a cubrir al ex trabajador la cantidad de 0 cero días, lo que ocurrió por diligencia del personal municipal negociador al aplicar como criterio el considerar que la renuncia de un trabajador al servicio del Estado es un acuerdo de voluntades entre las partes, porque existe la voluntad del trabajador para renunciar, y de la parte patronal para manifestar su voluntad al aceptar la renuncia, por lo que ésta resulta finalmente de un mutuo consentimiento, de conformidad al supuesto previsto en el artículo 55 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, que dice lo siguiente

[...]

Luego entonces, toda vez que el pago de finiquito parte de la negociación que realiza el trabajador y el ente público patronal, limitando ésta a los montos máximos que establece la normatividad aplicable, como es el caso de la indemnización cuyo límite son 90 días, cualquier cantidad menor a este concepto se traduce en un ahorro a las arcas públicas municipales, por lo que no obstante que se haya considerado erróneamente el salario diario integrado para realizar el cálculo del finiquito del trabajador, al no superar éste el concepto de 90 días, no existe un pago en exceso, al contrario, existe un ahorro logrado por la parte patronal.

Así pues, considerando esta situación y marco legal, como materia de esta reconsideración, respetuosamente se solicita a esta Auditoría Superior que no considere en su decisión únicamente la normatividad fiscal, particularmente lo dispuesto en los artículos 87, fracciones I y IX, y 105 de la Ley para el Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sino también el marco legal laboral aplicable para efecto de concluir que, a pesar del error, la erogación realizada al trabajador se encuentra dentro del margen legal de pago, con el beneficio, inclusive, de haber representado un ahorro significativo para los recursos económicos públicos municipales.».

Analizado lo manifestado por la recurrente y las demás constancias que integran al expediente administrativo en que se actúa, se considera lo siguiente: -----

El argumento formulado, resulta **infundado** para tener por solventada la observación de mérito atento a las siguientes consideraciones:

Señala la recurrente, de manera esencial que, si bien de la información entregada al órgano auditor, «[...] se detectó que el cálculo obedeció a un error en la fórmula del cálculo establecida en un equipo de cómputo [...], el monto erogado en beneficio del extrabajador se encuentra muy por debajo de las obligaciones económicas a las que el municipio se encontraba obligado [...]»; en consecuencia, la recurrente confirma la irregularidad detectada por este ente auditor, misma que derivó en la observación recurrida.

Reitera además, que «[...] no obstante se haya considerado erróneamente el salario diario integrado para realizar el cálculo del finiquito del trabajador, al no superar éste el concepto de 90 días, no existe un pago en exceso, al contrario, existe un ahorro logrado por la parte patronal [...]», solicitando a este ente fiscalizador, considerar no solo la legislación fiscal, sino también la laboral, para concluir que, «[...] a pesar del error, la erogación realizada al trabajador se encuentra dentro del margen legal de pago, con el beneficio, inclusive, de haber presentado un ahorro significativo para los recursos económicos públicos municipales [...]».

Ante dichos argumentos, resulta necesario referir que, conforme al principio de legalidad, las autoridades se encuentran constreñidas a ejercer sus funciones dentro del marco normativo aplicable, y para el cálculo y pago de remuneraciones, en el

caso específico, de finiquitos, el ente fiscalizado, al tratarse de recursos públicos, necesariamente debía atender a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en el sentido de apegarse estrictamente a los tabuladores de sueldos y salarios autorizados; por lo que, todo pago en contravención a éstos, resulta a todas luces infundado, al no existir norma que justifique pagos superiores a los montos previamente autorizados en los referidos tabuladores.

Asimismo, con independencia de que para el cálculo de los conceptos que integraron el finiquito, es decir, para el pago de prestaciones laborales, éstos se realicen conforme a la legislación laboral aplicable, dicha situación no se encuentra en debate, ni fue motivo de la observación en estudio, por lo que la referencia señalada por la recurrente, de que a pesar del error se logró un ahorro significativo de recursos, resulta errónea, ya que si dichos conceptos se calcularon considerando un sueldo base de cotización superior al autorizado por el H. Ayuntamiento en el Tabulador de Sueldos y Salarios Presupuesto 2021, dichos pagos también resultan irregulares, al superar el importe que les hubiere correspondido en el caso de haberse calculado conforme al salario diario integrado autorizado, como así lo exige la normativa aplicable, esto es, el artículo 87 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

En ese sentido, el agravio esgrimido por la recurrente, **resulta infundado**, pues lejos de que presente argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la observación, en su caso, argumentos que ataquen los fundamentos legales en que se sustenta, se concreta a reconocer el error en el cálculo y a señalar que se tuvo un ahorro en los recursos que erogó el municipio.

Atendiendo a las consideraciones expuestas, lo procedente en derecho es confirmar el sentido de la valoración de la observación recurrida, como **No Solventada**, con acciones de impacto económico pendientes de realizar por el sujeto fiscalizado. -----

Observación Núm. 005 Pago de prestación en finiquitos.

La observación recurrida señala en esencia lo siguiente:

«Con base en los elementos aportados y las diligencias efectuadas, se observa una erogación adicional por \$538,435.28, en el pago de los finiquitos de 5 extrabajadores del SIMAPAG, en virtud de que, se realizó el pago de indemnizaciones y de prima de antigüedad sin apego a lo establecido en la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios.

[...]»

La respuesta al Pliego de Observaciones y Recomendaciones fue insuficiente para solventar la observación, por lo que fue valorada como **No Solventada**, con acciones de impacto económico pendientes de realizar por el sujeto fiscalizado. -----

Inconforme con tal determinación, la recurrente expone lo siguiente: -----

«Cuarto [...]

Para llegar a esta conclusión, la Auditoría Superior tomó en consideración el segundo párrafo del artículo 8 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, para determinar que los trabajadores de confianza son sujetos a lo dispuesto por esta Ley Burocrática. Sin embargo, en un análisis integral, también es posible tener en consideración el primer párrafo del artículo 8 de propia Ley, el cual establece claramente que los trabajadores de confianza quedan excluidos del régimen de la Ley, teniendo derecho a disfrutar de las medidas de protección al salario y que gozarán de los beneficios de seguridad social, tal y como se transcribe a continuación:

[...]

Aunado a ello, el 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, lo que significa un cambio en el paradigma constitucional surgiendo con ella la interpretación conforme, prevista en el segundo párrafo del artículo primero constitucional, el cual a su letra dice lo siguiente:

[...]

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada 1.10.A.E.78 K (10a.), cuyo rubro dice INTERPRETACIÓN CONFORME. SU NATURALEZA DUAL EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO, con la finalidad de una explicación más clara, tesis que se cita a continuación:

[...]

Asimismo, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, así como del artículo 184 de la Ley Federal del Trabajo, se establece lo siguiente:

[...]

Pues bien, integralmente y como se desprende de todo lo expuesto, la Ley Federal de Trabajo, supletoria de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, reconoce que a los trabajadores de confianza se les hacen extensivas las condiciones de trabajo, por lo que partiendo de los principios de los Derechos Humanos de universalidad, interdependencia e indivisibilidad, resulta necesario reconocer la aplicación suprema del derecho humano de igualdad, contenido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que no debe imponerse un trato diferenciado entre los trabajadores de confianza, en cuanto a que a la el artículo 184 de la Ley Federal del Trabajo, establece claramente que las condiciones de trabajo se extienden a los trabajadores de confianza, salvo disposición en contrario que se encuentre consignada en las mismas.

En este sentido, el parámetro mínimo internacional sobre el tema es que cualquier persona que preste un servicio -trabajo en sentido amplio-, tiene derecho a desempeñarlo en condiciones dignas y justas y recibir como contraprestación una remuneración que permita a ellos y sus familiares gozar de un estándar de vida digno.

Así, la oportunidad de brindar protección al derecho humano referido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, atinente al derecho de igualdad y no discriminación con base en la condición de trabajador de confianza, radica en asegurar al particular el predominio de lo establecido en la Constitución en pro de aplicar el derecho que más le protege, siendo tal, el mandato supremo contenido en el artículo 123 constitucional, apartado B, fracciones V y XIV; protección que encuentra fundamento, además, en los artículos 1 párrafos primero, segundo y tercero y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que la desaplicación del citado precepto legal se traduce en lo más benéfico para los trabajadores, preceptos que se citan a continuación:

[...]

En consecuencia de todo ello, es posible reconsiderar y modificar apreciación del órgano fiscalizador, a efecto de reconocer que no solo las condiciones internas del organismo operador pueden extender expresamente sus beneficios a los trabajadores de confianza, sino que éstas de facto y legalmente se encuentran con aptitud para ser aplicadas al personal de confianza, a partir de una interpretación sistemática de todo el marco constitucional y legal que rige a la relación de trabajo, tal como se expuso con antelación. Y por ello, considerar solventada la observación cuya reconsideración se solicita.».

El agravio formulado resulta infundado, atento a las siguientes consideraciones. -----

Analizado lo manifestado por la recurrente las pruebas exhibidas y las demás constancias que integran al expediente administrativo en que se actúa, se considera lo siguiente: -----

En primer término, es de vital importancia señalar que lo previsto en el artículo 8 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios relativo a que dichos trabajadores ahí enunciados cuentan con el derecho a disfrutar de las medidas de protección al salario y de gozar de los beneficios de seguridad social deviene de un resultado residual de interpretación contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en lo previsto en la fracción XIV del apartado B del artículo 123.

Dicho contenido, reza de manera expresa de la siguiente manera:

“Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

A ...

I a XXXI...

B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores:

I a XIII...

XIV. La ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social.

[...]».

Ahora bien, es cierto que, en el modelo vigente de control de constitucionalidad y convencionalidad, en términos de los artículos 1º y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aún a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma de menor jerarquía.

Así entonces, la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sido interpretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera reiterada, en el sentido de que los trabajadores de confianza sólo gozan de medidas de protección al salario y de derecho a la seguridad social; derivado de ahí se ha concluido que la Constitución Federal no les ha otorgado algún otro derecho o beneficio.

Resulta aplicable por mayoría de razón la siguiente tesis Jurisprudencial:

Registro digital: 2005825

Tesis: 2a./J. 21/2014 (10a.)

Instancia: Segunda Sala

Décima Época

Tesis: 2a./J. 21/2014 (10a.)

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, página 877

Tipo: Jurisprudencia

Materia(s): Constitucional, Laboral

TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU FALTA DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO RESULTA COHERENTE CON EL NUEVO MODELO DE CONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. La actual integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que el criterio que ha definido a través de las diversas épocas del Semanario Judicial de la Federación, al interpretar la fracción XIV, en relación con la diversa IX, del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que los trabajadores de confianza al servicio del Estado sólo disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social, resulta acorde con el actual modelo de constitucionalidad en materia de derechos humanos y, por tanto, debe confirmarse, porque sus derechos no se ven limitados, ni se genera un trato desigual respecto de los trabajadores de base, sobre el derecho a la estabilidad en el empleo. Lo anterior, porque no fue intención del Constituyente Permanente otorgar el derecho de inamovilidad a los trabajadores de confianza pues, de haberlo estimado así, lo habría señalado expresamente; de manera que debe considerarse una restricción de rango constitucional que encuentra plena justificación, porque en el sistema jurídico administrativo de nuestro país, los trabajadores de confianza realizan un papel importante en el ejercicio de la función pública del Estado; de ahí que no pueda soslayarse que sobre este tipo de servidores públicos descansa la mayor y más importante responsabilidad de la dependencia o entidad del Estado, de acuerdo con las funciones que realizan, nivel y jerarquía, ya sea que la presidan o porque tengan una íntima relación y colaboración con el titular responsable de la función pública, en cuyo caso la "remoción libre", lejos de estar prohibida, se justifica en la medida de que constituye la más elemental atribución de los titulares de elegir a su equipo de trabajo, a fin de conseguir y garantizar la mayor eficacia y eficiencia del servicio público.

Es decir, se ha concluido que si la fracción XIV del apartado B del artículo 123 constitucional indica que los trabajadores de confianza disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social, entonces únicamente tienen derecho a esos beneficios.

No es óbice, señalar que no puede considerarse violatoria de derechos humanos; por una parte, porque ha reflejado de manera auténtica el sentido, pensar e intención del Constituyente Permanente, razón por la cual no cabe una interpretación distinta y, por otra, porque esa norma de rango constitucional no puede, en sí misma, vedar los derechos que justifican su existencia.

Resulta claro entonces, que el Constituyente Permanente no tuvo la intención de otorgar otros derechos a los trabajadores de confianza, porque de haberlo querido así lo habría señalado expresamente, de manera que debe considerarse como una **restricción de rango constitucional**.

En ese sentido, a todos los trabajadores, con independencia de que se traten de base o de confianza, les resulta aplicable la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, en lo concerniente a las medidas de protección al salario y los beneficios de la seguridad social, consecuentemente, tales indemnizaciones debieron efectuarse

con apego a dicha normativa y no a ninguna otra, pues dicha Ley es concordante con lo que la norma constitucional refiere a las medidas de protección al salario y seguridad social.

En segundo término, es necesario puntualizar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1o., reconoce que las personas gozan de derechos humanos, los que se encuentran contenidos en las normas de la propia Constitución Federal y en tratados internacionales, de manera tal que una norma de rango constitucional, cuya finalidad, objetivo y sentido jurídico normativo, ha sido reconocer los derechos humanos de las personas, no puede a su vez contravenir un derecho humano.

Consecuentemente, si no fue expresa la intención del Constituyente Permanente de conceder a los trabajadores de confianza el derecho a la estabilidad en el empleo, la norma contenida en la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal, que les otorga medidas de protección al salario y derecho a la seguridad social, no puede, señalarse contravención a los derechos humanos, por establecer tal protección únicamente para los trabajadores de base en su fracción IX, ni tampoco el de igualdad y no discriminación, porque la diferencia entre trabajadores de confianza y base, está dada en la propia Norma Fundamental.

Por ende, lo previsto en el artículo 8 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios se encuentra armonizado en plenitud con lo previsto en nuestra Carta Magna, por tanto, generar una interpretación distinta a ello, o ejercer atribuciones de control de convencionalidad y constitucionalidad ex officio no concedidas a las autoridades enunciadas en dicho texto normativo, estaría generando un actuar contrario a la Constitución Federal, situación que transgrede el orden jurídico mexicano, y que tiene como resultado la invalidez de la actuación de quien despliegue dicha conducta.

Así entonces, la aplicación de dichas medidas, distintas a las concedidas a los trabajadores de base, constituye un ejercicio de armonización con el texto Constitucional, por tanto, realizar algo diverso a ello se advertirá contrario a la Constitución y carente de fundamento.

Consecuentemente, y como resultado de lo anterior, la aplicación del artículo 8 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios por parte de la autoridad municipal no es optativa, sino restrictiva, entonces se estima **infundado** el agravio esgrimido por esta ya que no existe fundamento legal que le permita ejercer dichas potestades de otra forma.

Respecto de lo anterior expuesto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el siguiente criterio¹:

PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. La posibilidad de inaplicación de leyes por los Jueces del país, en ningún momento supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción de constitucionalidad de ellas, sino que, precisamente, parte de esta presunción al permitir hacer el contraste previo a su aplicación. En ese orden de ideas, **el Poder Judicial al ejercer un control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos**, deberá realizar los siguientes pasos: a) Interpretación conforme en sentido amplio, lo que significa que los Jueces del país -al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano-, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia; b) Interpretación conforme en sentido estricto, lo que significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los Jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la

¹ "Registro: 160525, "Décima Época "Instancia: Pleno "Tesis aislada "Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "Libro III, Tomo 1, diciembre de 2011. "Materia: constitucional "Tesis: P. LXIX/2011 (9a.) "Página: 552

Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos; y, c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Lo anterior no afecta o rompe con la lógica de los principios de división de poderes y de federalismo, sino que fortalece el papel de los Jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte.

Así pues, es claro que en ningún momento hay vulnerabilidad a los derechos humanos, pues como ya se dijo, con independencia de las categorías laborales, la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, prevé las medidas de protección al salario y los beneficios de la seguridad social que debieron aplicarse.

Atendiendo a las consideraciones expuestas, lo procedente en derecho es confirmar el sentido de la valoración de la observación recurrida, como **No Solventada**, con acciones de impacto económico pendientes de realizar por el sujeto fiscalizado. -----

Recomendación Núm. 002 Cartera Vencida.

La recomendación recurrida señala en esencia lo siguiente:

«Se recomienda reflejar el saldo de la cartera vencida como notas de desglose a los estados financieros; en los que, se pueda apreciar de manera detallada, por cada ejercicio, el importe del monto pendiente por recuperar, considerando que dichas notas forman parte integral de los mismos, con la finalidad de que la información financiera presentada sea más confiable y transparente; toda vez que, durante la revisión se tuvo conocimiento que los importes de la cartera no son reflejados en los estados Financieros del SIMAPAG.

Así mismo, se recomienda que se creen todas las cuentas 4.1.7.3 «*Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales*» necesarias para reflejar los ingresos por rezago, de manera que sea plenamente identificable el saldo de las cuentas que corresponden a ingresos por prestación de servicio corriente y las que corresponden a ingresos de rezago; toda vez que, durante la revisión se identificó que ambos ingresos se registran en una sola cuenta.».

La respuesta al Pliego de Observaciones y Recomendaciones fue insuficiente para atender la recomendación, por lo que fue valorada como **No Atendida**. -----

Inconforme con tal determinación, la recurrente expone lo siguiente: -----

«**Quinto.** [...]»

Al efecto, mediante oficio número DSA/007/2023, de fecha 17 de enero de 2023, dirigido al Lic. José Luis Vega Godínez, Director General de Servicios Jurídicos, se remiten copias de la respuesta de SIMAPAG a las observaciones no solventadas, mismo que se anexa al presente y menciona lo siguiente:

"El detalle de la Cartera vencida no podría agregarse como una nota a los estados financieros dado que no existe un registro contable, lo que se realiza acorde con lo señalado en la fracción II del Artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y la Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos (MCI), que establecen:

[...]

Por los argumentos antes vertidos, la cartera vencida no se identifica en alguno de los momentos contables de registro del Ingreso y por tanto no podría contabilizarse y detallarse en las notas de desglose."

En este sentido, a partir de la argumentación vertida en el oficio de referencia, que debe tenerse aquí por íntegramente reproducida, la Auditoría Superior puede reconsiderar su decisión y, en consecuencia, declarar como atendida la observación correspondiente.

Cabe precisar que aún y cuando de la literalidad de lo expuesto por la recurrente, se desprende que no es propiamente un agravio, resulta procedente entrar al estudio de lo manifestado, pues es suficiente para ello la expresión de la causa de pedir y los motivos que la originan, conforme al criterio 2014329 sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Sexto Circuito, visible en la página 2195 del Libro 42, Tomo III, de mayo de 2017, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, previamente transcrito en la presente resolución.

Una vez analizada la documentación adjunta al recurso de reconsideración, se tiene que la recurrente señala que, la cartera vencida no se identifica en alguno de los momentos contables de registro del ingreso y por tanto, no podría contabilizarse y detallarse en las cuentas de desglose; sin embargo, en la normativa que se plasma, no se especifica algún impedimento para hacerlo, aunado a que, el CONAC en su acuerdo relacionado con ESTADOS E INFORMES CONTABLES, PRESUPUESTARIOS, PROGRAMÁTICOS Y DE LOS INDICADORES DE POSTURA FISCAL, I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, refiere lo siguiente:

«[...]

Las notas a los estados financieros son explicaciones que amplían el origen y significado de los datos y cifras que se presentan en los Estados Financieros, proporcionando información acerca del ente público, sus transacciones y otros eventos que lo han afectado o podrían afectar económicamente, las cuales son parte integrante de los mismos, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa.

Su objetivo es revelar y proporcionar información adicional que no se presenta en los Estados Financieros, pero que es relevante para la comprensión de alguno de ellos. Lo anterior para dar cumplimiento a los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

[...]

b) NOTAS DE DESGLOSE

[...]

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

[...]

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

3. Se informará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones e inversiones financieras) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas.»

Conforme a lo señalado por el CONAC, sí es posible que se refleje el monto pendiente de cobro, correspondiente a la cartera vencida del servicio de agua, como notas de desglose en los estados financieros, con lo cual se podría apreciar de manera detallada y por cada ejercicio, el importe del monto pendiente por recuperar, con la finalidad de que la información financiera presentada sea más confiable y transparente.

Atendiendo a las consideraciones expuestas, lo procedente en derecho es **confirmar** el sentido de la valoración de la recomendación recurrida, como **No Atendida**. -----

Recomendación Núm. 003 Apoyo a Sindicato SIMAPG.

La recomendación recurrida señala en esencia lo siguiente:

«Se recomienda fortalecer el apartado de apoyos en los Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal 2021, especificando el tipo de seguimiento que se daría la aplicación de los apoyos de importe relevante y el personal que lo realizaría, esto con la finalidad de corroborar el correcto uso del recurso económico que se otorgue como apoyo.

Lo anterior, toda vez que, se identificó que se proporcionó como apoyo un importe de \$200,000.00 para suministro de materiales de construcción para espacio del Sindicato "Vicente Guerrero", sin designar algún tipo de supervisión y seguimiento, por parte de algún funcionario.

[...]».

La respuesta al Pliego de Observaciones y Recomendaciones fue insuficiente para atender la recomendación, por lo que fue valorada como **No Atendida**. -----

Inconforme con tal determinación, la recurrente expone lo siguiente: -----

«Sexto. [...]

Al efecto, mediante oficio número DSA/007/2023, de fecha 17 de enero de 2023, dirigido al Lic. José Luis Vega Godínez, Director General de Servicios Jurídicos, se remiten copias de la respuesta de SIMAPAG a las observaciones no solventadas, mismo que se anexa al presente y menciona lo siguiente:

"Para atender la recomendación de adicionar "algún tipo de supervisión y seguimiento a las entregas de los apoyos y con ello otorgar mayor transparencia en la aplicación de recursos erogados por el SIMAPAG, se realizó la propuesta de modificación del apartado de Complementarios, donativos y ayudas" que se contempla en el punto XIV de la Sección Segunda de los Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal, los cuales son aprobados por el Consejo Directivo. Actualmente la propuesta de modificación está en proceso de revisión, y en su caso, autorización por parte del Consejo Directivo del organismo, lo que se acreditó con la copia del similar 253/DG-DAF/2022 del 02 de diciembre de 2022, se remitirá la evidencia correspondiente cuando dicha etapa se tenga concluida."

En este sentido, a partir de la argumentación vertida en el oficio de referencia, que debe tenerse aquí por íntegramente reproducida, la Auditoría Superior puede reconsiderar su decisión y, en consecuencia, declarar como atendida la observación correspondiente.».

Cabe precisar que aún y cuando de la literalidad de lo expuesto por la recurrente, se desprende que no es propiamente un agravio, resulta procedente entrar al estudio de lo manifestado, pues es suficiente para ello la expresión de la causa de pedir y los motivos que la originan, conforme al criterio 2014329 sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Sexto Circuito, visible en la página 2195 del Libro 42, Tomo III, de mayo de 2017, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, previamente transcrito en la presente resolución.

En ese sentido, a efecto de atender dicha recomendación, la recurrente aportó la siguiente documentación: -----

- a) Oficio DSA/007/2023, de fecha 17 de enero de 2023, suscrito por el Director de Seguimiento de Auditorías, mediante el cual remite al Director General de Servicios Jurídicos, copia de la respuesta del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato (SIMAPAG) a las observaciones no solventadas.
- b) Copia simple de oficio 0039-DG-DAF/2023, de fecha 16 de enero de 2023, suscrito por el Director General del SIMAPAG, mediante el cual informa al Director de Seguimiento de Auditorías del municipio de Guanajuato la respuesta al informe de resultados, respecto de la observación número 005 y recomendaciones número 002 y 003 (conteniendo solo las páginas: 1 de 4, 3 de 4 y 4 de 4).
- c) Copia simple de memorando No. 253/DG-DAF/2022, de fecha 02 de diciembre de 2022, suscrito por el Director General del SIMAPAG, mediante el cual remite al Presidente del Consejo Directivo, para análisis y revisión de la Comisión Jurídica, y en su caso, autorización por parte del Consejo Directivo, la propuesta de actualización de los Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal para el Ejercicio 2023, Sección Segunda, apartado XVI de "Complementarios, donativos y ayudas".

Por cuanto hace a los documentos exhibidos en el recurso, es importante mencionar que, mediante tales documentales no se acredita la atención de la recomendación. Asimismo, no pasa desapercibido para este ente resolutor, que el contenido del memorando número 253/DG-DAF/2022, de fecha 02 de diciembre de 2022, se encontraba ya proporcionado de manera íntegra, en la respuesta al Pliego de Observaciones y Recomendaciones, pero en el diverso número **2029/DG-DAF/2022** de fecha 2 de diciembre de 2022, por lo que resulta evidente que, aunado a que la recurrente no aporta elementos, ni emite argumentos novedosos con los cuales se esté en posibilidad de modificar el sentido de la valoración realizada por esta Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a la recomendación materia del presente, las documentales aportadas resultaron insuficientes para atenderla.

Atendiendo a las consideraciones expuestas, lo procedente en derecho es confirmar el sentido de la valoración de la recomendación recurrida, como **No Atendida**. -----

Por lo expuesto y fundado **se resuelve**: -----

Primero: El suscrito Auditor Superior del Estado de Guanajuato, resultó competente para resolver el presente asunto. -----

Segundo: Se confirma el sentido de la valoración de la **Observación Núm. 001 Especificaciones técnicas de Equipo de Cómputo**, como **No Solventada**, sin acciones pendientes de realizar por el sujeto fiscalizado. -----

Tercero: Se confirma el sentido de la valoración de la **Observación Núm. 003 Publicación en el Periódico Oficial**, como **No Solventada**, modificando su complemento de con acciones correctivas pendientes de realizar por el sujeto fiscalizado a sin acciones pendientes de realizar por el sujeto fiscalizado. -----

Cuarto: Se confirma el sentido de la valoración de la **Observación Núm. 004 Finiquito**, como **No Solventada**, con acciones de impacto económico pendientes de realizar por el sujeto fiscalizado. -----

Quinto: Se confirma el sentido de la valoración de la Observación Núm. 005 Pago de prestaciones en finiquitos, como No Solventada, con acciones de impacto económico pendientes de realizar por el sujeto fiscalizado. -----

Sexto: Se confirma el sentido de la valoración de la Recomendación Núm. 002 Cartera Vencida, como No Atendida. --

Séptimo: Se confirma el sentido de la valoración de la Recomendación Núm. 003 Apoyo a Sindicato SIMAPG, como No Atendida. -----

Octavo: Notifíquese a la recurrente en términos de lo dispuesto por los artículos 31 y 55, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, así como 34, fracción VII, del Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato. -----

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55 y 87, fracción X de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato y 9, fracción XX, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. -----

Noveno: Archívese el presente asunto, por estar totalmente concluido. -----

Cumplase. -----

Así lo proveyó y firma el ciudadano Auditor Superior del Estado de Guanajuato, Licenciado y Maestro en Fiscal Javier Pérez Salazar. -----

La presente resolución, se firma electrónicamente con fundamento en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, el Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato y la Ley Sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.-----
OPR/GRL/CJGP/RVR

Hoja de Firmantes

Documento

Nombre: RESOLUCIÓN RR (GTO RCP 2021).pdf
Digestión del Archivo: 502Rg36emCCcgQGVijQ4Ovncnhqc3IE0xL0kRe6S8XQ=
Algoritmo de Digestión: SHA256

FIRMANTE

Nombre: JAVIER PEREZ SALAZAR - AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO Validez: Vigente

FIRMA

No Serie: 50.4c.45.47.30.31.00.00.00.07.5f Revocación: No Revocado
Fecha (UTC / CD MX): 27/01/2023 17:53:06 - 27/01/2023 11:53:06 Status: Valida
Algoritmo: RSA - SHA2

Cadena de firma:
72 d3 b8 7b ab 18 cc 90 a1 75 0b 6a ae fa f8 24 12 12 53 bc 11 a7 0d 31 95 87 2e 20 09 d7 5d 0c a3 b8 db 4f f3 15 25 c4 bb 2c 71
a5 08 50 41 77 f9 80 d2 6d 0a f9 48 18 75 f1 d5 75 27 3a 85 81 0d 5b b8 14 c0 92 ef 3c 4e d8 5b 76 53 5b fd 47 c6 4b ca 6b 95 99
b8 27 da 75 9a ff 63 a9 b0 5c 7e 00 e4 25 a9 3f 8a 46 b3 91 c6 43 e1 79 08 dc 51 ca 3f d7 a5 f8 d2 ec 8d 61 ea bf f0 89 fd 40 15 03
45 f4 bc 43 e3 1e f9 80 55 46 d8 c1 e3 49 60 3b 6c 8e 9b c5 5d 76 90 de 07 da 0c af 6e ab 32 bc c0 66 92 24 67 87 69 f5 c5 b9 55
fc 95 61 81 2d 9a e2 7e 6f ed a6 c1 aa bb ed 4b a3 9e 82 0d ed 0a 48 69 9f b3 a0 a3 84 23 b5 43 e4 e6 11 d7 f3 3b 04 60 bf df 43
be f9 c8 b7 38 0c 96 53 97 10 67 15 6c 91 21 65 7c be 46 3c 9d ab 04 65 fa de 14 9a b5 60 d6 97 cb ac 33 53 f8 ef bf 19

OCSP

Fecha (UTC / CD MX): 27/01/2023 17:54:45 - 27/01/2023 11:54:45
Nombre del Respondedor: Servicio OCSP de la AC del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato
Emisor del Respondedor: AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Número de Serie: 50.4c.45.47.30.31.30.35

TSP

Fecha (UTC / CD MX): 27/01/2023 17:54:47 - 27/01/2023 11:54:47
Nombre del emisor de la respuesta TSP: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1
Emisor del certificado TSP: Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economía
Identificador de respuesta TSP: 638104172874252330
Datos: mKsOq4OIHZvpBGRbtNcnPuTqEU4=

Firma Electrónica Certificada